

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ACUERDO NÚMERO: CTFGJEZ/UT/047/2024

NÚMERO DE FOLIO: 321103824000405

LCDO. SALVADOR EDUARDO VILLA ALMARAZ, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Presidente del Comité de Transparencia, **MTRO. JUAN CARLOS VALDIVIA MERAZ**, Vicefiscal de Apoyo Procesal y Vocal del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y el **MTRO. JOSÉ REFUGIO MEDINA NÚÑEZ**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité de Transparencia, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren el artículo 11 apartado H, 13 fracción III, 19, 20 fracción V, 25 y 65 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; 27, 28, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 6, 8, 113 y 116 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 3 fracción VIII, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y,

VISTO para resolver la solicitud de acceso a la información pública, presentada por **José Vázquez** a través del Sistema Nacional de Transparencia, ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, y

RESULTANDO

PRIMERO. - El 30 de septiembre de 2024, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió una solicitud de información por parte de **José Vázquez** a través de la cual se requiere a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, entre otros datos, lo siguiente:

El número total de personas facilitadoras y/o mediadoras, fiscales del ministerio público y personal administrativo adscritas al OEMASC, especificar el perfil educativo acreditado en todos los distritos judiciales del Estado de Zacatecas.

SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se admitió a trámite la solicitud de información de **José Vázquez** con el número de folio **321103824000405**.

TERCERO. - En términos de lo establecido en el ordinal 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se turnó la solicitud de información a la Dirección General de Administración, por ser el área encargada de administrar los recursos humanos a la cual se dio respuesta mediante oficio MEM/DGA-408/2024 afirmando que la información relativa al personal operativo y administrativo de la Fiscalía, es clasificada como reservada, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas se encuentra facultado para conocer, dictar los acuerdos necesarios y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 apartado H, fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; artículos 8, 43, 44, 103, 104, 113 y 114 de la Ley General de Transparencia, así como lo dispuesto por los artículos 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 82 fracciones I y III, 83, y 106, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

SEGUNDO. -De conformidad con lo establecido en el numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el INAI, el presente Acuerdo cumple con las formalidades establecidas en el mismo.

TERCERO. - El folio que nos ocupa, solicita, entre otras cosas el número total de personas facilitadoras y/o mediadoras, fiscales del ministerio público y personal administrativo adscritas al OEMASC, en todos los distritos judiciales del Estado de Zacatecas. Al respecto es oportuno considerar:

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en las fracciones I Y III del artículo 82, establece que la información reservada podrá clasificarse cuando:

I. Pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o salud de una persona física;

II.

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

IV a la IX.

Lo anterior, en armonía con la fracción VII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo que a fin de resolver respecto a dicha solicitud de información se considera lo siguiente:

El artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la información que posee cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Por su parte, el párrafo noveno del similar 21 del mismo ordenamiento señala que la seguridad pública, comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

Al respecto, el artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece que son funciones del Ministerio Público, allegarse, requerir y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito.

Dicho lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su ordinal 113 fracciones I, V y VII, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en sus artículos 4 y 82 fracciones I y III, establecen excepciones a esa obligación al permitir clasificar la información como reservada cuando: comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable y obstruya la prevención o persecución de los delitos.

Para tal efecto, con fecha 15 de abril de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el INAI, los cuales señalan que **los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.**

Es por eso que sirven como sustento para la presente clasificación de información, **los numerales Vigésimo sexto de conformidad con el artículo 113 fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos, al demostrarse que se causa un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, toda vez que existen procesos penales en substanciación o carpetas de investigación en trámite, se acredita el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación o el proceso penal según sea el caso y la difusión de la información puede impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público durante la etapa de investigación con motivo del ejercicio de la acción penal, así como el Vigésimo noveno de conformidad con el artículo 113 fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso, al actualizarse la existencia de un procedimiento judicial en trámite y con su divulgación se afecta la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso, así como el Trigésimo primero de conformidad con el artículo 113 fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las carpetas de investigación durante la cual, de conformidad con la normatividad en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación del imputado y la reparación del daño.**

En esa tesitura, resulta procedente realizar la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por lo que se analiza lo siguiente:

a. **La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.**

Se verifica el supuesto de reserva porque se causa un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, cuyo fundamento es el punto Décimo octavo de los Lineamientos, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley General, el cual establece que podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios tendientes a preservar y

resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público. Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública. De igual manera es aplicable el Vigésimo tercero de conformidad con el artículo 113 fracción V de la Ley General, el cual establece que será necesario acreditar un vínculo entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad y salud. Vigésimo sexto de conformidad con el artículo 113 fracción VII de la Ley General, considera información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos, toda vez que la difusión de la información puede impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente en la etapa de investigación.

Tanto a nivel convencional, como constitucional y legal se encuentran resguardados los derechos inherentes a quienes laboran en las instituciones de seguridad pública. Tal es su relevancia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Aldea los Josefinos vs. Guatemala, emitió una sentencia a través de la cual se estableció que los Estados tienen la obligación de asegurar que sus funcionarios estatales cuenten con las debidas garantías de seguridad para llevar a cabo sus funciones en la investigación del delito. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 36 estableció que los Estados deben adoptar medidas que protejan a los funcionarios de seguridad pública de amenazas, agresiones y cualquier otro acto o represalia.

Los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia, conforman la Institución del Ministerio Público, como un ente de buena fe, única, indivisible y funcionalmente independiente puesto que los fiscales actúan exclusivamente en su nombre, es decir, como un solo cuerpo tanto en lo material como en las decisiones jurídicas que adopten, lo cual conlleva a que la adscripción de su personal no sea permanente, sino que atenderá a las necesidades de la Institución, sin embargo, en el cumplimiento de sus atribuciones sustantivas se tornan vulnerables a distintos tipos de agresión que actualmente van en aumento, como la violencia homicida, dado que actúan constantemente en situaciones peligrosas por su intervención en actividades de investigación sobre conductas delictivas, la realización de interrogatorios a sospechosos, la detención de infractores y la persecución de delincuentes, situaciones en la que corre peligro su vida y su integridad, sometiéndose incluso a amenazas públicas por parte de los miembros del crimen organizado.

La información a la que pretende tener acceso el solicitante, es inherente a servidores públicos en funciones de labores sustantivas y operativas, así como del personal administrativo que coadyuva en las tareas de investigación, cuya divulgación abre una amplia probabilidad para que bandas del crimen organizado que constituyen un poder paralelo basado en terror y control territorial, debiliten las estructuras del Estado encargadas de la seguridad pública las cuales se encuentran rebasadas operativa y estratégicamente hablando, lo que implica que se deben tomar medidas más radicales para hacerle frente. Una de las herramientas utilizadas por esas bandas, es conocer cómo operan éstas a través de la recopilación de información por cualquier medio para allegarse de información trascendental, por ejemplo, la conocida como "teoría del mosaico" la cual sostiene que en materia de seguridad nacional, para determinar una reserva, no debe analizarse de manera aislada la

información que se solicita, puesto que una información aparentemente inofensiva puede generar una afectación cuando se correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión de conjunto. Es importante tomar en consideración la utilidad que pudiera tener “para cualquier persona” obtener datos específicos del personal que integra esta institución.

Es por eso que, a fin de preservar el desarrollo de las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se debe partir de privilegiar la protección de los servidores públicos que laboran en la misma, dado que difundir información de esta naturaleza, entorpece su capacidad de reacción y la capacidad con que se cuenta para hacer frente a los índices de criminalidad cada vez más altos, de igual manera se pone en riesgo la integridad de las investigaciones y el debido proceso toda vez que el actuar del personal operativo está sujeto a estrictas normas de confidencialidad.

Por otro lado, se violan diversas disposiciones como lo dispuesto en el **artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, pues al difundirse dicha información a personas ajenas a la institución, se debilita la seguridad pública cuyos fines son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas así como su contribución a la generación y preservación del orden público y la paz social, ya que el clima de violencia criminal en el que ejercen sus funciones tanto las instituciones de procuración de justicia como las policiales genera enormes riesgos para los servidores públicos; **el artículo 10 de la Ley de Seguridad Nacional** señala que el personal de las instancias de Seguridad Nacional, acordará previamente a su ingreso a la institución de guardar secreto y confidencialidad de la información;

Es por eso que el Estado se encuentra en posibilidades de restringir el acceso a la información pública siempre y cuando **las restricciones busquen proteger y respetar algún interés o bien jurídicamente tutelado, tales como la seguridad nacional, el orden público, la adecuada conducción de los expedientes judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, así como cuando se pone en riesgo la seguridad o la vida de las personas. Al respecto, en este asunto en particular, poner a disposición de terceros ajenos a la Institución información relacionada con el personal operativo adscrito a la misma, pone en riesgo la operatividad y el desarrollo de actividades de inteligencia a cargo de los mismo, es por eso que se debe llevar a cabo un ejercicio de ponderación a fin de determinar el nivel de afectación que podría obtenerse con la divulgación de la información y el interés de la colectividad.** El artículo **15 del Código Nacional de Procedimientos Penales** señala el deber de respetar el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en los procedimientos penales, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales; el artículo **110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública** señala que se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos en materia de detenciones, información criminal, **personal de seguridad pública...**; el párrafo último del artículo **39 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas** señala que toda la información concentrada en los Registros que constituyen el Sistema de Seguridad Pública, entre otros, **el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública** tiene el carácter de reservada y confidencial.

Asimismo, el artículo 28 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, el registro de integrantes del Servicio Profesional es la herramienta de seguimiento y control, y deberá contener información sistematizada, básica y técnica, relativa a la planeación de recursos humanos de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación. Los datos personales que se contengan en dicho registro, serán considerados como reservados y confidenciales, en términos de lo establecido por el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución.

Además, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, en su artículo 82 señala que la obtención y tratamiento de los datos personales a cargo de instancias de seguridad, procuración e impartición de justicia está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública, o para la prevención o persecución de los delitos.

b. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:

El derecho fundamental de acceso a la información pública no es absoluto y por tal motivo, se debe llevar a cabo un ejercicio de ponderación cuando dos o más de estos se encuentran en pugna. En este caso en particular, por un lado, se encuentra el derecho del solicitante a conocer información que se genera por parte de esta Institución y por otro lado el derecho de la colectividad a vivir en un Estado de paz, libre de criminalidad y en el cual, si vida, integridad y seguridad personal y patrimonial, se encuentren debidamente resguardados por el Estado.

c. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio

La colisión de principios consiste en que dos normas, tomadas en sí mismas, concluyen a resultados recíprocamente contradictorios. Ninguna es inválida, ninguna tiene una precedencia absoluta. Lo que tenga validez dependerá de qué decisión deba adoptar a la luz de las circunstancias del caso concreto.

La finalidad de preservar el sigilo en los actos de investigación, es evitar que personas ajenas a la institución y que, en un momento determinado, pudieran ser miembros del crimen organizado, lleven a cabo actos de contrainteligencia para desvirtuar o viciar los actos de investigación a cargo del personal operativo y con ello, crezca aún más el índice de impunidad.

CUARTO. - En términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 4, fracción VI del artículo 24, fracción II del artículo 44, 100 y párrafo segundo del 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos de la ley estatal en la materia, el Comité de Transparencia confirma la RESERVA DE LA INFORMACIÓN por un periodo de CINCO años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en observancia y seguimiento a la solicitud de información **21103824000405** realizada mediante el Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, se

RESUELVE

PRIMERO. Se RESERVA LA INFORMACIÓN por un periodo de CINCO años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en los Estrados de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Así lo determinamos los integrantes del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en Sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2024 en la Sala de Prensa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Zacatecas número 401, tercer Piso, Colonia Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas, quienes firmamos al margen y al calce la presente Acta y damos constancia para los efectos legales a que haya lugar.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LCDO. SALVADOR EDUARDO VILLA ALMARAZ
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. JUAN CARLOS VALDIVIA MERAZ,
Vicefiscal de Apoyo Procesal

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. JOSÉ REFUGIO MEDINA NÚÑEZ
Titular del Órgano Interno de Control